

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Alba Stella Montoya González
DEMANDADO	UGPP
PROCEDENCIA	Juzgado 24 Laboral del Cto. de Medellín atendiendo las directrices impartidas en el Acuerdo CSJANTA21-16 del 24 de febrero de 2021
RADICADO	05001 3105 <b>007 2020 00173</b> 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 152 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de jubilación art 98 y 101 convención colectiva de trabajo ISS – persona pensionada por Colpensiones
DECISIÓN	confirma

Hoy, **dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo, y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación a los recursos de apelación interpuestos por el apoderado de la señora **Alba Stella Montoya González** y de la **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP-**, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de la misma entidad (Autos AL2178-2022, AL6068-2021, AL2876-2021), frente a la sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito - Acuerdo CSJANTA21-16 del 24 de febrero de 2021- dentro del proceso ordinario laboral con radicado único nacional 05001 3105 **007 2020 00173** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto estudiado,

discutido y aprobado mediante acta **Nº. 020**, que se plasma a continuación:

## **Antecedentes**

Se orienta la pretensión de la demandante a que le sea reconocida la pensión de jubilación establecida en las cláusulas 98 y 101 de la Convención Colectiva de Trabajo SINTRASEGURIDADSOCIAL, a partir del 1 de enero de 2015. En consecuencia, solicita que la demandada sea condenada a pagar el retroactivo causado hasta el 31 de enero de 2017, y a partir del 1º de febrero del mismo año, asumir el mayor valor entre la prestación convencional y la de vejez otorgada por Colpensiones. También pide se conceda la indexación y las costas del proceso.

En sustento de ello indica que, nació el 1 de febrero de 1957 y ha trabajado para diversas entidades, así: del 28 de mayo al 21 de julio de 1991, para el Municipio de Medellín; desde el 11 de agosto de 1991 hasta el 24 de enero de 1996, para el Municipio de Bello; del 25 de enero al 5 de noviembre de 1996, para Terminales de Transportes de Medellín; y para el ISS desde el 4 de junio de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2014. Se desvinculó del ISS mediante un acuerdo conciliatorio del 29 de diciembre de 2014. Alega que durante su último año de servicio devengó un salario de \$6.325.653.00. Que es beneficiaria de la Convención Colectiva, lo que le otorga el derecho a que se le apliquen las cláusulas 98 y 101. Aduce que el 9 de junio de 2017 presentó reclamación ante la UGPP para el reconocimiento y pago de la prestación de jubilación, pero fue negada en la Resolución 2726 del 26 de enero de 2018, argumentando que los regímenes pensionales pactados convencionalmente estuvieron vigentes solo hasta el 31 de julio de 2010. Se interpusieron los recursos legales correspondientes

contra esta decisión. Señala que en el acto administrativo GNR393163 del 29 de diciembre de 2016, Colpensiones le otorgó una pensión por un monto de \$4.171.865,00, la cual quedó en suspenso hasta que acreditara su retiro del sistema, cumplido dicho supuesto, mediante la Resolución GNR29061 del 25 de enero de 2017, se ordenó la inclusión en nómina a partir del 1o de febrero de 2017, en cuantía de \$4.416.174.00.

Por medio de auto fechado el **25 de agosto de 2020**, se admitió la acción. La parte demandada fue debidamente notificada y, a través de su apoderada judicial, presentó pronunciamiento en el que aceptó la fecha de nacimiento de la demandante y la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. Sin embargo, la misma fue resuelta de manera negativa, lo que la llevó a interponer los recursos legales correspondientes. Los restantes hechos no son ciertos, no le constan o se atiende a lo probado. **Resistió** las pretensiones, y formuló las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de la obligación, pago, compensación, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

La primera instancia concluyó con **sentencia emitida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito**, en la cual se declaró que la señora Alba Stella Montoya González tiene derecho a la pensión de jubilación convencional. En consecuencia, condenó a la UGPP a reconocerle y pagarle la prestación a partir del 1 de enero de 2015. Se determinó que recibirá 13 pagos anuales hasta el 31 de enero de 2017, y a partir del 1º de febrero de 2017, se otorgaría el mayor valor entre esta prestación y la pensión de vejez otorgada por Colpensiones. El retroactivo fue calculado en \$114.670.138,00 hasta el 31 de enero de 2017, y la suma superior entre el 1º de febrero de 2017 y el 30 de junio de 2023, se estableció en \$19.138.522,00, para un total a sufragar por parte de la

accionada de \$133.828.660,00, monto que debe ser indexado al momento de la cancelación real y frente al cual autorizó los descuentos correspondientes al sistema de seguridad social en salud. A partir del 1º de julio de 2023, se debe continuar asumiendo el mayor valor entre ambas prestaciones, que asciende a \$280.366,00. Absolvió del pago de intereses moratorios e impuso costas a la parte demandada, fijando el monto de las agencias en derecho.

La juez, después de revisar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral sobre el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional en cuestión, determinó que la demandante cumple con los requisitos necesarios para acceder a dicha prestación, en tanto, demostró que acumuló un total de 21 años, 11 meses y 14 días de servicio al 31 de diciembre de 2014, en el Instituto de Seguros Sociales como en otras entidades. Además, cumplió los 50 años de edad el 1º de febrero de 2007. Por lo que, ordenó el pago a partir del 1 de enero de 2015, ya que no se dio la prescripción de dicho derecho.

Determinó el valor a reconocer teniendo en cuenta el promedio de los ingresos recibidos durante el último año, aplicando los factores establecidos en la convención colectiva. Estos incluyen la asignación básica mensual, las primas de servicios y vacaciones, los auxilios de alimentación y transporte, el valor del recargo nocturno suplementario y las horas extras dominicales, correspondiéndole el 75% de dicho cálculo.

Asimismo, dispuso el otorgamiento del derecho desde el 1º de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 2017, así como el pago de un mayor valor de mesada a partir del 1º de febrero de 2017 hasta el 30 de junio de 2023. Se especificó el monto de cada período y se ordenó la actualización mediante el mecanismo de la indexación. También se

autorizó el descuento correspondiente al sistema de seguridad social en salud.

**Inconformes las partes, interpusieron recurso de apelación, así:**

**Demandante**, discrepa únicamente en lo referente a los factores considerados para calcular el monto de la pensión, específicamente solicita incluir el que corresponde a las vacaciones pagadas durante los meses de julio y agosto de 2014, ya que este concepto constituye salario. Además, insta para que se tengan en cuenta los incrementos por servicios percibidos, ya que tienen naturaleza salarial y lo complementan, tal como lo establece el articulado de la convención colectiva. Por ende, pide que se modifique el valor de la pensión y el retroactivo.

**Demandada**, requiere se revoque la sentencia en su integridad y en su lugar se absuelva de las pretensiones, para ello, arguye que, según la documentación presentada, al 31 de julio de 2010 la demandante no cumplía con los requisitos establecidos en la convención colectiva y el acto legislativo 01 de 2005 para acceder a la pensión de jubilación, esto en tanto, esta última normativa no permite reconocimientos posteriores a esta fecha, y así mismo lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 4 de noviembre de 2015.

Manifiesta que la condena impuesta contradice el alcance del Acto Legislativo y la interpretación de la Corte Constitucional en la sentencia SU155-2014, ya que tanto la edad como el tiempo de servicio son requisitos de causación para las pensiones convencionales y no de exigibilidad. En caso de confirmarse, insta para que se tenga en cuenta que la entidad actuó conforme a las normas y que la negativa de otorgar

la pensión convencional se basó en los lineamientos legales y jurisprudenciales, por tal, debe absolverse del pago de las costas.

De la etapa para presentar alegaciones hizo uso la **UGPP**, argumenta que la demandante no cumple con los requisitos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo para acceder a la pensión de jubilación, ya que no tenía la edad requerida al 31 de julio de 2010, fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005. Afirma que la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social establece un régimen de pensiones diferente al establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, determina una edad mínima de jubilación de 55 años (hombres) y 52 años (mujeres).

Asevera que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la edad es un verdadero requisito de exigibilidad y no de causación, no obstante, dicha posición controvierte el alcance del Acto Legislativo 01 de 2005 y lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU555 de 2014, donde se señala que para pensiones convencionales la edad no es un mero requisito de exigibilidad sino un de causación, al igual que el tiempo de servicio. Esto significa que, para el caso de la actora al contar la actora con 52 años de edad al 31 de julio de 2010, fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, no acredita los supuestos establecidos en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo.

En cuanto a las condenas por indexación, agencias en derecho y costas, la entidad solicita que se revoquen o reconsideren, ya que ha actuado de buena fe y no se encuentran acorde con lo establecido el acuerdo No. PSAA16-10554 y el artículo 55 de la ley 446 de 1998. Finalmente, insta

para que se tenga en cuenta el carácter de compatibilidad con que cuenta la pensión reconocida.

**Demandante**, cita senda jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en la cual en casos con tintes similares al analizado se concede el derecho, pidiendo se le de aplicación a la misma, así como que se tenga en cuenta los tratados internacionales de la OIT, que la convención colectiva se torna en un derecho adquirido y que en caso de duda se debe dar aplicación al principio de favorabilidad.

Finalmente, solicita que para efectos de la liquidación de la prestación se incluyan los pagos de vacaciones y de incremento por servicios, indicando para ello que ambos rubros tienen naturaleza salarial. Frente al primero, manifiesta que es un descanso remunerado que se paga con salario. Durante el período de vacaciones, el trabajador disminuye su asignación básica percibiéndola ya no como salario sino como vacaciones. Y, frente al segundo, aduce que se encuentra consagrado en el artículo 40 de la convención colectiva de trabajo, siendo un complemento del salario percibido por el trabajador, retribuyendo directamente el servicio, lo cual resulta coherente con lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978.

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones**

Como hechos debidamente acreditados se tienen que: Alba Stella Montoya González nació el 01 de febrero de 1957, cumpliendo los 50 años de edad la misma fecha de 2007. Según el acta de conciliación, laboró como trabajadora oficial al servicio del ISS, desde el 21 de julio de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2014. También prestó servicios para el Municipio de Medellín, desde el 28 de mayo hasta el 21 de julio

de 1991; para el Municipio de Bello del 11 de agosto de 1991 al 24 de enero de 1996; y para Terminales de Transporte entre el 25 de enero y el 5 de noviembre de 1996. La convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL se celebró el 31 de octubre de 2001 y tenía vigencia hasta el 31 de octubre de 2004, excepto los artículos 98 y 101, cuya eficacia se pactó hasta el 2017. Solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación ante la UGPP, y en el Auto ADP6538 del 31 de agosto de 2017 se determinó que el caso sería remitido a Colpensiones. Sin embargo, en la Resolución 2726 del 26 de enero de 2018, se le negó. Posteriormente, tras interponer los recursos legales correspondientes, la decisión fue confirmada en acto administrativo RDP009907 del 16 de marzo de 2018 y revocada en la RDP 016292 del 07 de mayo de 2018, indicando que se debía acatar lo dispuesto en el Auto ADP6538 del 31 de agosto de 2017. En la Resolución GNR 393163 del 29 de diciembre de 2016, Colpensiones otorgó la pensión de vejez, pero se dejó en suspenso hasta que se acreditara el retiro del servicio. Una vez cumplido dicho requisito, en la Resolución GNR 29061 del 25 de enero de 2017, se dispuso el pago a partir del 1 de febrero de 2017, en cuantía de \$4.416.174,00. Se estableció que la prestación estaría a cargo del Municipio de Medellín y Bello, así como de Colpensiones.

Así las cosas, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si la actora, como beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita por el ISS con su sindicato, le asiste o no derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación consagrada en los artículos 98 y 101 de dicho acuerdo, considerando que no cumplió con el requisito de contar con 20 años de servicio antes de la fecha límite establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. De verificarse la procedencia del pago de la prestación, se analizará la fecha en que esta



se causa, el monto correspondiente, teniendo en cuenta los factores que deben computarse para su liquidación, y la pertinencia o no de imponer costas procesales.

Pues bien, para desatar el asunto, dable resulta recordar, que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en principio, indicó que no resultaba posible extender los efectos de las cláusulas de un convenio colectivo de trabajo más allá del 31 de julio de 2010, en la medida en que se entendía que, para todos los efectos, ese fue el plazo máximo fijado por el constituyente para obtener un beneficio pensional de estirpe extralegal (sentencias SL2798-2020, SL2543-2020 y SL2986-2020).

Sin embargo, en la sentencia **SL3635-2020**, reiterada en la **SL4904-2021**, la alta Corporación **modificó su postura, precisando que, cuando una disposición colectiva consagre una vigencia que cubra un periodo superior a esa data, ésta debe respetarse, pues, de una parte, si se previó de esa manera desde el comienzo, es porque la voluntad de los partícipes fue la de darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, porque al quedar incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garantía a la legítima expectativa de obtener el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o acuerdo colectivo de trabajo que firmaron producto de la negociación colectiva, mientras continúe vigente, así esa vigencia supere el límite del 31 de julio de 2010.**

Para dicho cambio se tuvo en cuenta que los compromisos consagrados en los acuerdos colectivos de trabajo constituyen derechos adquiridos,

bien porque ya se han causado o hacen parte de aquellas prerrogativas concretas que, aunque no estén consolidadas, sí han determinado una expectativa válida respecto de la permanencia de sus cláusulas, basadas en el principio de la buena fe.

De acuerdo con ello, las pautas que regulan actualmente el tema de las pensiones consagradas en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005, según la **sentencia SL3635-2020**, son:

*"En conclusión, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rectifica parcialmente su criterio sentado en las sentencias precitadas y, en su lugar, precisa que, en materia pensional consagrada en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005 las pautas que regulan el asunto, son las siguientes:*

*a) En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. (Destaca la Sala)*

*b) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010.*

*c) Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las reglas legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010."*

Posición que ha sido reiterada hasta la actualidad, tal y como se puede apreciar entre otras, en providencias, **SL399-2022, SL516-2022, SL579-2022, SL626-2022, SL1226-2022, SL1240-2022, SL1311-2022, SL1482-2022, SL1603-2022, SL1656-2022, SL853-2023, SL905-2023, SL1023-2023, SL1228-2023 y 1490-2023.**

Así las cosas, como a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, la cláusula 98 de la convención venía rigiendo y, de acuerdo con el ***plazo inicialmente pactado, tenía vigencia hasta el año 2017***, se tiene que, las partes acordaron darle a dicha preceptiva mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales estipulados, razón por la cual, y contrario a lo expuesto en el recurso de apelación por la accionada, es dable entrar a analizar si la accionante acredita las condiciones y requisitos exigidos en el artículo 98 para obtener el reconocimiento de la prestación pensional, dispone la norma:

*El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales:*

- (i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio.*
- (ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio.*
- (iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio.*

*Para estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores de remuneración:*

- a. Asignación básica mensual*
- b. Prima de servicios y vacaciones*
- c. Auxilio de alimentación y transporte*
- d. Valor trabajo nocturno, suplementario y en horas extras*
- e. Valor del trabajo en días dominicales y feriados*

Así, al ser procedente el reconocimiento del derecho, dable resulta estudiar las normas colectivas, determinando el artículo 98 como requisitos para causar la pensión de jubilación cumplir “*veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco*

(55) años si es hombre y cincuenta (50) años si se es mujer (...)”, sin que satisfaga la actora la primera exigencia, pues la misma impone que las 20 anualidades de labores sean prestadas exclusivamente al ISS, y la reclamante trabajó para dicha institución un total 6.372 días, que equivalen 17,7 años, por tal, no es posible reconocer la prestación a la luz de tal disposición, no obstante, el artículo 101 del citado acuerdo colectivo, permite acumular el tiempo de labores prestado al ISS y a otras entidades de derecho público al establecer que:

***Los servicios prestados sucesiva o alternativamente en las demás entidades de derecho público podrán acumularse para el cómputo del tiempo requerido para poder tener derecho a pensión de jubilación y el monto correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo laborado en cada una de las entidades.***

Por lo tanto, al tenerse que la señora Alba le prestó los servicios al Municipio de Medellín y de Bello respectivamente, desde el 28 de mayo hasta el 21 de julio de 1991, y del 11 de agosto de 1991 al 24 de enero de 1996, lo cual equivale a 1.680 días, 4,66 años y, para el ISS, 6.372 días, 17,7 años, **acumulando un total de 22,36 años, y al haber nacido el 01 de febrero de 1957, arribó a los 50 años en idéntica fecha de 2007, esto es, en pleno vigor del artículo 98 de la convención, cláusula que remite el citado artículo 101 para efectos de verificar los supuestos de causación y exigibilidad de la prestación**, por lo que le asiste derecho al reconocimiento y pago en los términos previstos en la misma, resultado dable así, **confirmar el fallo revisado** en lo que respecta a la concesión, y la data a partir de la cual se otorga, **01 de enero de 2015**, al haber dejado de laborar en el ISS el 31 de diciembre de 2014 y al no haber operado el fenómeno extintivo de la prescripción, en los términos de los artículos 488 del C.S.T y del artículo 151 del C.P.T y la SS, en tanto se elevó reclamación el 27 de junio de 2017, negándose en Resolución 2726 del 26 de enero de

2018, la cual ante la interposición de recursos fue confirmada en la RDP009907 del 16 de marzo de 2018 y revocada en la RDP 016292 del 07 de mayo de 2018, habiéndose presentado la demanda el 9 de julio de 2020.

Para determinar el valor de la mesada, al haberse aplicado el artículo 101 de la convención para el reconocimiento de la pensión, ante la sumatoria de tiempos, es a esta misma disposición a la que se acude para liquidarla, estableciendo el numeral segundo que *"En este caso, la cuantía de la pensión será del 75% del promedio de lo percibido en el último año de servicios por concepto de todos los factores de remuneración que constituyen salario"*, factores que se encuentran establecidos en el párrafo 5° del artículo 98 convencional, y que incluyen, **la asignación básica mensual, las primas de servicios y vacaciones, los auxilios de alimentación y transporte y el valor del trabajo nocturno, suplementario, horas extras, dominicales y festivos**, sin que se pueda considerar ningún otro concepto, tal y como lo solicita el apoderado recurrente. Esto se debe a que cuando una convención colectiva prevé la forma de liquidar una pensión, esto es, los factores y criterios específicos, son estos los que deben aplicarse, al constituirse el acuerdo celebrado entre empleador y sindicato, en ley para las partes, y con ello no poderse seleccionar únicamente los aspectos favorables y excluir los que no lo son tanto. Solo en casos en los que no se haya previsto nada al respecto, será posible recurrir a otros criterios a fin de calcular el valor de la pensión.

Sobre el asunto, en sentencia SL1049-2022, se citó lo expresado en la SL4086-2017, en la que se indicó:

*"[...]Pues bien, **sea lo primero destacar que la pensión reconocida a Cuartas Gil por Caprecom fue de origen convencional por lo que, en***

***principio, es tal instrumento el que determina la forma de calcular el IBL así como los factores salariales que lo integran.***

*No obstante, al plenario no obra copia de la convención colectiva de trabajo, de modo que conforme lo ha establecido la Sala en reiteradas oportunidades, es menester acudir a los precisos términos que sobre el particular establezca la ley» (...).*

***En cuanto al segundo reparo, relacionado con los factores salariales que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión de la actora, es de señalar que cuando un convenio colectivo de trabajo consagra una pensión de jubilación sin establecer en concreto cuáles son aquellos que deben observarse para su liquidación, o cuando el instrumento colectivo en el que supuestamente se establecieron, no obra al plenario, en ningún yerro incurre el juez si con fundamento en las normas que regulan la materia, establece cuáles son los que lo integran.*** Resaltos fuera del texto e intencionales de la sala. Sobre este aspecto véase también las sentencias SL551-2021, SL4665-2021 y SL3138-2018, entre otras.

Luego no se pueden incluir factores que constituyan salario y que se encuentren en capítulos distintos al de la pensión de jubilación, dado que estos hacen alusión o referencia a otros aspectos laborales y no pensionales. Esto implica que, si las partes hubieran querido considerar otros conceptos como integrantes al liquidar los derechos pensionales establecidos en los artículos 98 y 101 de la convención colectiva, habrían tenido que ser expresamente relacionados en la convención.

Realizado el cálculo de la primera mesada tal y como consta en cuadro adjunto, se obtuvo un promedio igual al liquidado por la a quo, así como el valor por retroactivo entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2017, esto es, **\$114.690.138**, por tal, **se confirma** este apartado.

Ahora, como la prestación que se concede tiene el carácter de compatible con la legal de vejez a cargo del Sistema de Seguridad Social, al tener la finalidad permitir a los empleadores que se liberen total o parcialmente del pasivo a su cargo, evitando así el pago de dos

prestaciones para el mismo riesgo, pues así lo previó primigeniamente el artículo 5 del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de la misma anualidad, y luego lo reprodujo el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Al operar esta subrogación por ministerio de la Ley, se debe tener en cuenta que, si el monto de la pensión que debe cancelar el empleador es superior al que le reconoció el ISS, se mantiene el disfrute de la primera. En este caso, el empresario queda obligado a asumir la diferencia, no obstante, ese mayor valor no constituye una pensión diferente que deba ser reajustada en forma separada de la asignación concedida por el Colpensiones. En consecuencia, al constatarse que a la actora le fue conferida pensión de vejez a partir del 01 de febrero de 2017 en cuantía de \$4.416.174,00, y al evidenciarse una diferencia con la que se venía cancelando, corresponde a la UGG asumir dicho rubro. El valor de la diferencia tal y como lo determinó la juez de instancia y como se puede ver en cuadro adjunto, asciende entre el 01 de febrero de 2017 y el 30 de junio de 2023 a \$19.138.522,00. A partir del 01 de julio, el mayor valor a reconocer es de \$280.366,00. Puntos en los que **se confirma** la sentencia de instancia.

La suma a cancelar por concepto de retroactivo, deberá ser actualizado mediante el mecanismo de la indexación, hasta la data en que efectivamente se verifique el pago total de la obligación, ello, atendiendo lo establecido en los artículos 48 y 53 superiores, los principios de equidad y justicia, adicional a que es el criterio actual de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en aras de restablecer el poder adquisitivo del beneficiario, el cual ha sido depreciado debido al fenómeno inflacionario presente en la economía nacional. En este

aspecto, se ratifica la decisión tomada en primera instancia, así como en cuento autorizó los descuentos con despido a salud.

Finalmente, en lo que tiene que ver con **la condena en costas**, en la que se incluyen las agencias en derecho, es relevante destacar que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en forma reiterada ha adoctrinado que **no son consecuencia de un proceder determinado de las partes, de suerte que no interesa que se haya actuado de buena o mala fe** (CSJ AL4123-2019). Además, la mentada condena contiene una obligación procesal que se «*dirige contra el patrimonio de la parte vencida y que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir*» (ver autos CJS AL3132-2017, CSJ AL3612-2017, CSJ AL5355-2017, CSJ AL2924-2022, CSJ AL2952-2022 y CSJ AL 5445-2022), por lo que se mantiene esta condena en primera instancia a cargo de la accionada. En relación al monto de las agencias en derecho, frente a lo cual se mostró disenso en los alegatos, baste decir que no nos encontramos en la etapa procesal para refutar el valor dispuesto.

Sin costas en esta instancia ante las resultas adversas de los recursos.

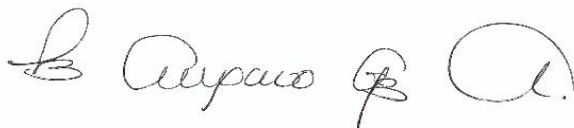
En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de esta ciudad dentro del proceso ordinario promovido por **Alba Stella Montoya González**, en contra de la **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP-**.



Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Las magistradas** (firmas escaneadas)



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO**

Periodo	No. de Días	Asignación básica	Remu. Domini y Festivo	Remun. Jornada nocturna	prima especial de servicios	Prima de servicios	Prima de vacaciones	Auxilio de alimentación	Auxilio de transporte
ene-14	30	\$ 4.282.933							
feb-14	30	\$ 4.282.933							
mar-14	30	\$ 4.282.933							
abr-14	30	\$ 4.282.933							
may-14	30	\$ 4.698.378							
jun-14	30	\$ 4.366.022				\$ 4.802.624	\$ 6.633.163		
jul-14	30	\$ 3.056.215							
ago-14	30	\$ 1.455.341							
sep-14	30	\$ 4.366.022							

oct-14	30	\$ 4.366.022							
nov-14	30	\$ 4.366.022							
dic-14	30	\$ 4.366.022				\$ 5.908.152			
SUB TOTAL FACT. SALAR		\$ 48.171.776	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.710.776	\$ 6.633.163	\$ 0	\$ 0
TOTAL FACTORES SALARIALES								\$ 65.515.715	
PROMEDIO ANUAL								\$ 5.459.643	
VALOR MESADA CON EL 75%								\$ 4.094.732	

RETROACTIVO					
Año	IPC	# mesadas		Valor pensión	Total Retroactivo
2015	6,77%	13		\$ 4.094.732	\$ 53.231.516
2016	5,75%	13		\$ 4.371.945	\$ 56.835.290
2017	4,09%	1		\$ 4.623.332	\$ 4.623.332
2018	3,18%			\$ 4.812.427	\$ -
2019	3,80%			\$ 4.965.462	\$ -
2020	1,61%			\$ 5.154.149	\$ -
2021	5,62%			\$ 5.237.131	\$ -
2022	13,12%			\$ 5.531.458	\$ -
2023				\$ 6.257.185	\$ -
TOTAL					\$ 114.690.138

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2016	5,75%	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
2017	4,09%	\$ 4.416.174	\$ 4.623.332	\$ 207.158	12	\$ 2.485.896
2018	3,18%	\$ 4.596.796	\$ 4.812.426	\$ 215.631	13	\$ 2.803.200
2019	3,80%	\$ 4.742.974	\$ 4.965.461	\$ 222.488	13	\$ 2.892.342
2020	1,61%	\$ 4.923.207	\$ 5.154.149	\$ 230.942	13	\$ 3.002.251
2021	5,62%	\$ 5.002.470	\$ 5.237.131	\$ 234.661	13	\$ 3.050.587
2022	13,12%	\$ 5.283.609	\$ 5.531.458	\$ 247.848	13	\$ 3.222.030
2023		\$ 5.976.819	\$ 6.257.185	\$ 280.366	6	\$ 1.682.197
TOTAL						\$ 19.138.522